



NINGÚN OTRO LUGAR ADONDE IR

DEVOLUCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS SOMALÍES DEL CAMPO DE DADAAB, KENIA

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan por un mundo en el que todas y todos disfrutan de los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia principalmente gracias a nuestra membresía y a donaciones públicas.

© Amnesty International, febrero de 2016

Salvo cuando se indique lo contrario, el contenido de este documento está protegido por una licencia Creative Commons (atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Para más información, visita la página Permisos de nuestro sitio web:

<https://www.amnesty.org/es/about-us/permissions/>

El material atribuido a titulares de derechos de autor distintos de Amnistía Internacional no está sujeto a la licencia Creative Commons..

Publicado por primera vez en 2016

por Amnesty International Ltd.

Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, Reino Unido

Índice: AFR 32/5118/2016

Idioma original: Inglés

[amnesty.org](https://www.amnesty.org)



Foto de portada: Personas refugiadas somalíes esperan en Kenia su vuelo de regreso a Mogadiscio, agosto de 2016. © Amnesty International

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



1. RESUMEN EJECUTIVO

“Lo que quiero es quedarme. Esta es mi casa y donde he pasado toda mi vida adulta. Aquí es donde están mis hermanas. No hay ningún otro lugar adonde ir. No hay paz. No es posible volver. No tomaré otra decisión si no me garantizan que la seguridad en Somalia es buena. Pero lo que prefiero es que el gobierno de Kenia cambie de opinión y nos acepte.”

Aisha, mujer somalí de 21 años residente del campo de refugiados de Dadaab

En mayo de 2016, el gobierno de Kenia anunció su intención de cerrar el campo de refugiados de Dadaab el 30 de noviembre de 2016. Dadaab es el campo de refugiados más grande del mundo y alberga a más de 280.000 personas, de las que 260.000 son somalíes. La mayoría lleva años viviendo allí y, en algunos casos, dos decenios. Al hacer el anuncio, el gobierno keniano dejó claro que su intención es que las personas refugiadas somalíes volvieran a Somalia. Aunque Kenia lleva varios años diciendo que quiere la repatriación de los somalíes, desde abril de 2016 sus declaraciones y medidas políticas reflejan un endurecimiento de la postura del gobierno.

Lo sumamente ajustado del plazo y la ausencia de alternativas para la población refugiada somalí dejan abierta la posibilidad de que se lleven a cabo devoluciones en gran escala a Somalia, país que sigue azotado por el conflicto armado. Estos retornos violarían el derecho internacional, especialmente el principio de no devolución, y constituirían una violación grave de los derechos humanos de las personas refugiadas.

Amnistía Internacional visitó Dadaab en agosto de 2016 y habló con 56 somalíes sobre el futuro y sus circunstancias. El equipo de investigación se entrevistó con personas que planeaban retornar a Somalia, con otras que no querían regresar y con otras que habían vuelto a Somalia para huir de nuevo a Kenia debido a la violencia y la inseguridad. La organización se reunió también con organizaciones humanitarias, con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y con donantes implicados en Dadaab, y trató de entrevistarse con las autoridades de Kenia disponibles. El equipo estudió las declaraciones públicas de varias autoridades kenianas sobre el cierre de Dadaab y el futuro de la población refugiada somalí, y examinó el mandato de las nuevas instituciones creadas para dar efecto al anuncio de mayo.

Desde mayo, el gobierno de Kenia somete a una presión creciente a las personas refugiadas para que regresen a Somalia, a través de un proceso de repatriación “voluntaria”. La repatriación voluntaria se había acordado con anterioridad, en virtud de un Acuerdo Tripartito entre los gobiernos de Kenia y Somalia y el ACNUR firmado en 2013. Mientras que la ONU y algunas declaraciones del gobierno siguen hablando de retornos “voluntarios”, estos retornos no son posibles en las circunstancias actuales. En junio, la Comisión Tripartita anunció que al final de 2016 se reduciría la población del campo de Dadaab en 150.000 personas; esta disparidad de parámetros ha causado confusión, pero no ha reducido el riesgo de que se produzcan devoluciones.

El obstáculo más evidente para el retorno voluntario es que la mayoría de las personas refugiadas no desea ir a Somalia. Durante una verificación de la población llevada a cabo entre julio y agosto de 2016, el ACNUR concluyó que solamente el 25 % de la población refugiada de Dadaab estaba dispuesto a volver. Según una encuesta realizada por la ONG médica Médicos sin Fronteras (MSF), el 86 % de las personas refugiadas dijo que ni ellas ni sus familias querían volver a Somalia debido a problemas de seguridad, como el miedo al reclutamiento forzoso a manos de grupos armados, y a la ausencia de atención sanitaria y de otros servicios.

El gobierno de Kenia no ha ofrecido alternativas a los residentes de Dadaab que no quieren ir a Somalia. Si se cierra el campo, no tendrán donde ir. Las intenciones del gobierno son claras. Poco después del anuncio del cierre de Dadaab, se dismanteló el Departamento de Asuntos de la Población Refugiada y se nombró un grupo especial para liderar el proceso de repatriación, integrado por un Equipo Multiagencias Nacional de Repatriación y el Equipo Operativo de Repatriación de Refugiados, con sede en Dadaab, dependiente del Consejo de Seguridad Nacional. Las autoridades han declarado expresamente que las personas deberán volver a Somalia, y estas declaraciones no indican que los retornos sean voluntarios; por el contrario, algunas de ellas dejan claro que el gobierno procederá a la devolución de personas a este país.

En un intento de coaccionar a las personas para que hagan lo que se podría hacer pasar por un retorno voluntario, las autoridades han comunicado a las personas refugiadas de Dadaab que si no regresan antes del 30 de noviembre podrían no recibir el paquete de ayuda económica de 400 dólares estadounidenses.

A mediados de octubre, en 2016 sólo habían vuelto a Somalia 27.000 personas, supuestamente de forma voluntaria. Amnistía Internacional y otras organizaciones han puesto en entredicho que estos retornos sean realmente voluntarios, dada la presión que se está ejerciendo en Dadaab, pero también por la información, insuficiente y equívoca, sobre el proceso de retorno y la situación de la seguridad en Somalia. El equipo de investigación de Amnistía Internacional analizó los textos y la información disponible para las personas refugiadas y concluyó que faltaban detalles sobre los problemas de seguridad.

La situación de la seguridad en Somalia ha mejorado hasta cierto punto en algunas zonas. No obstante, persisten el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a personas refugiadas que habían vuelto a Somalia en 2015 y a principios de 2016 —y que regresaron posteriormente al campo de refugiados de Dadaab—, que describieron a la organización los horrores que habían sufrido en Somalia, como ataques, homicidios y la pérdida de sus medios de vida. Aisha, de 21 años, madre soltera de tres niños de corta edad, contó a Amnistía Internacional la situación que se encontró al volver a Somalia en agosto de 2016:

Tras volver por un tiempo a Abdidor, Al Shabaab entró en el barrio. El hombre con el que vivía fue asesinado inmediatamente y a mí me dieron una paliza. El ACNUR me había dado 660 dólares estadounidenses y yo había invertido algo de dinero en un negocio en el mercado. Se llevaron el dinero que quedaba y destruyeron mi tienda.

Aisha había llegado a Dadaab a los 12 años con sus dos hermanas después de que mataran a sus padres en Somalia. Añadió: “Ya lo he hecho [volver a Somalia] una vez y miren lo que ha pasado [...] Quemaron mi tienda, mataron a mi compañero, y a mi bebé y a mí nos dejaron sin nada. Tardé meses en volver [a Kenia] porque no tenía dinero y dependía de la ayuda de otros.”

Dos hermanos hablaron con la organización de sus experiencias tras ser reclutados forzosamente por el grupo armado Al Shabaab. Aunque ellos finalmente escaparon, otros no tienen esa suerte. El secuestro y reclutamiento de menores es una práctica generalizada en Somalia, y la mayoría de los casos se atribuyen a Al Shabaab. El Ejército Nacional Somalí y las milicias de los clanes también reclutan a menores.

Además de los riesgos de seguridad que afrontan quienes regresan a Somalia, el país no está preparado para acoger a un gran número de retornados. En Somalia hay más de 1,1 millones de personas desplazadas internas, muchas de las cuales viven en campos de desplazados internos. Las autoridades y las organizaciones humanitarias no han tenido tiempo para prepararse para el aumento de retornos, y la respuesta humanitaria internacional es deficiente. En agosto de 2016, las autoridades del estado de Jubbada Hoose paralizaron el retorno de 1.100 somalíes desde Kenia debido a la ausencia de asistencia humanitaria. Uno de los motivos de preocupación que esgrimían las autoridades era el carácter no planificado de los retornos, que podía empeorar una situación de la seguridad ya de por sí inestable, además del hecho de que el paquete de retorno era insuficiente para permitir la integración plena de los refugiados y la probabilidad de que la mayoría de ellos acudiera a los campos para personas desplazadas internas, que ya estaban desbordados e infradotados.

Hay grupos especialmente vulnerables que afrontarían sin duda riesgos mortales si se los obliga a volver a Somalia. Amnistía Internacional habló con personas con discapacidad que dejaron claro que no querían regresar a Somalia y que temían por si vida si las obligaban a hacerlo. Durante las investigaciones realizadas

en Somalia en 2013 y 2014, Amnistía Internacional halló que las personas con discapacidad tienen un riesgo más alto de sufrir abusos, incluidas la violencia sexual y de género. Los grupos minoritarios, como los bantúes somalíes, también sufren marginación y son objeto de reclutamiento forzoso por el grupo armado Al Shabaab.

Aunque algunas personas y grupos afrontan claramente riesgos específicos y son especialmente vulnerables, que sepa Amnistía Internacional, no se ha adoptado ninguna medida para garantizarles que no tendrán que volver a Somalia o para darles alternativas si se cierra Dadaab. La ausencia de una planificación adecuada del proceso de retorno se suma a los riesgos que corren las personas refugiadas somalíes.

A medida que se aproxima el plazo del 30 de noviembre, los temores y la incertidumbre aumentan. Aunque no parecen probables ni el cierre completo del campo ni una reducción de su población en 150.000 personas para finales de 2016, no ha disminuido la determinación de las autoridades de Kenia de dejar de albergar a refugiados somalíes. Esto deja sin responder preguntas, entre las personas refugiadas y los organismos de ayuda, sobre lo que sucederá al final de noviembre y posteriormente.

Además de analizar el impacto de las declaraciones políticas del gobierno de Kenia en la situación de la población refugiada somalí en Dadaab, el informe estudia por qué la política de Kenia ha experimentado un cambio tan marcado en 2016. El gobierno ha vinculado el cierre del campo a razones de seguridad nacional, a la prolongada inacción de la comunidad internacional a la hora de compartir la responsabilidad y de apoyar a Kenia en la acogida de la población refugiada, y a la lentitud del apoyo a los retornos a Somalia. Aunque las quejas de Kenia sobre la falta de apoyo internacional son fundamentadas, eso no puede justificar nunca las devoluciones forzadas. La comunidad internacional ha aportado sistemáticamente menos fondos de los necesarios a los llamamientos para las personas refugiadas en Kenia. Al final de octubre de 2016, sólo se había cubierto el 38 % de los fondos solicitados por el ACNUR para este país. En la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul en mayo de 2016, el vicepresidente de Kenia, William Ruto, señaló que la comunidad internacional había prometido 500 millones de dólares estadounidenses a su país, de los que se había entregado menos del 1 %. Los ofrecimientos para reubicar a personas refugiadas vulnerables desde Kenia, en virtud de un programa del ACNUR, también han sido sistemáticamente escasos.

La frustración de Kenia por la ausencia de un reparto de la responsabilidad se da en un contexto de tensiones crecientes entre los Estados sobre esta cuestión. Sólo diez países acogen a la mitad de los 21 millones de personas refugiadas del mundo, y Kenia es uno de ellos. También se da en un contexto en el que la UE y sus Estados Miembros —donantes clave para Kenia— han ofrecido a Turquía 6.000 millones de euros (alrededor de 6.600 millones de dólares estadounidenses) para acoger a personas refugiadas y mantenerlas fuera de Europa. Algunos analistas de política exterior han señalado que la forma en que la UE está manejando la crisis de refugiados ha dado fuerza al gobierno de Kenia para promover su política interna de cerrar Dadaab.

No se han cuestionado lo suficiente las declaraciones del gobierno sobre la seguridad. Kenia ha relacionado una y otra vez a las personas refugiadas somalíes con el grupo armado Al Shabaab. Sin embargo, hay pocas pruebas que respalden esa afirmación; antes bien, los refugiados somalíes han sido utilizados como chivos expiatorios tras los atentados terroristas, algo que ya había documentado Amnistía Internacional. Aunque no hay duda de que el gobierno tiene motivos de preocupación legítimos sobre la seguridad, la respuesta a estos problemas no puede ser asociar, de forma general y sin fundamento, una comunidad refugiada a los grupos armados, o devolver a más de 200.000 personas a un conflicto armado.

Kenia no está sola a la hora de mezclar seguridad y refugiados, una postura que ha hecho que en todo el mundo las personas refugiadas paguen el precio por delitos de terrorismo que rara vez tienen relación con las poblaciones refugiadas. Aparentemente, Kenia responde a la tendencia general o la utiliza para sus fines. Por ejemplo, el 9 de mayo, el doctor Karanja Kibicho, secretario principal del Ministerio del Interior y Coordinación del Gobierno Nacional, afirmó: “Nuestra medida se toma en un momento en el que un número creciente de países —ricos y pobres por igual— del mundo está limitando la entrada de personas refugiadas por motivos de seguridad nacional.”

La situación en la que se encuentran ahora las personas refugiadas somalíes en Kenia, y los graves riesgos para sus derechos humanos, reflejan el fracaso conjunto de Kenia y de la comunidad internacional. Pero aunque ambos están profundamente implicados, ninguno puede señalar al otro para librarse de su responsabilidad. Kenia ha decidido proceder con las devoluciones y no ha estudiado debidamente otras alternativas, como un proceso para integrar a las personas refugiadas en la sociedad keniana.

El ACNUR sigue apoyando el proceso de repatriación “voluntaria”, aunque algunos miembros de su personal reconocen que las declaraciones de las autoridades del gobierno de Kenia no reflejan un enfoque voluntario.

Algunos de los socios clave de Kenia en materia de refugiados están ya profundamente implicados en políticas abusivas propias hacia la población refugiada, especialmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que han dedicado los últimos 18 meses a dejar claro que violarán el derecho internacional y firmarán acuerdos económicos para mantener fuera de la Unión a las personas refugiadas. Por otra parte, la UE está enredada en iniciativas regionales en el Este y el Cuerno de África para impedir que las personas migrantes y refugiadas lleguen al Norte de África y a la ruta marítima hacia Europa. La inacción a la hora de ayudar a las personas refugiadas en Kenia y la disposición a cometer abusos contra estas personas en su territorio, junto con la aparente voluntad de gastar dinero si sirve para mantenerlas fuera de Europa, ha catalizado, como era previsible, una carrera hacia el abismo en lo que se refiere a la protección global de la población refugiada.

La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la UE, está financiando programas para la repatriación de personas refugiadas desde Dadaab a Somalia, un país donde sabe que muchas afrontarán las dificultades y los abusos contra los derechos humanos de los que habían huido. Los anuncios de mayo y lo estricto del plazo han dado poco tiempo a los donantes para reflexionar, y muchos donantes y el ACNUR están presentando su participación como algo necesario para garantizar que los retornos son voluntarios al mismo tiempo que saben que no pueden serlo.

En este informe se pide al gobierno de Kenia que detenga inmediatamente el proceso de retorno, y al ACNUR y a la comunidad internacional que dejen de facilitarlos. En lugar de seguir firmando acuerdos miopes para frenar los flujos migratorios en África, la comunidad internacional debería apoyar soluciones sostenibles a largo plazo para la población refugiada somalí y de otros países en Kenia, como oportunidades para integrarse en las comunidades de acogida y un aumento significativo de las plazas de reubicación para compartir realmente la responsabilidad con Kenia. El apoyo efectivo a Kenia debe incluir también pasar de una respuesta puramente humanitaria a las poblaciones refugiadas en los países de acogida, marco en el que los servicios son siempre limitados, a otra que garantice una mayor autonomía para estas personas. Este enfoque conlleva la inclusión de actores del desarrollo desde las primeras fases de las acciones de respuesta a los refugiados, a fin de ofrecer oportunidades inclusivas a más largo plazo tanto a éstos como a las comunidades anfitrionas. También implica algo tan crucial como el abandono de la política de albergar a la población refugiada en campamentos, que sólo sirve para aislarla y arrebatarle su autonomía.

**AMNISTIA INTERNACIONAL ES
UN MOVIMIENTO GLOBAL DE
DERECHOS HUMANOS. LAS
INJUSTICIAS QUE AFECTAN A
UNA SOLA PERSONA NOS
AFECTAN A TODAS Y A TODOS.**

CONTÁCTANOS



info@amnesty.org



+44 (0)20 7413 5500

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN



www.facebook.com/AmnestyGlobal



[@AmnestyOnline](https://twitter.com/AmnestyOnline)

NINGÚN OTRO LUGAR A DONDE IR

DEVOLUCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS SOMALÍES DEL CAMPO DE DADAAB, KENIA

El 6 de mayo de 2016, el gobierno de Kenia anunció su intención de clausurar el campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo, el 30 de noviembre de 2016. Dadaab da refugio a 280.000 personas —entre ellas a 260.000 refugiados y refugiadas de Somalia—, algunas de las cuales llevan viviendo en ese lugar desde hace más de dos decenios. Entre los motivos que aduce el gobierno para clausurar Dadaab figuran las afirmaciones según las cuales el campo supone una amenaza para la seguridad nacional, y que la comunidad internacional no presta a Kenia el apoyo que necesita para mantenerlo.

Si bien es cierto que tanto la ONU como determinados gobiernos han declarado que a las personas refugiadas somalíes se les ha pedido que regresen voluntariamente a Somalia, en las circunstancias actuales, estos retornos “voluntarios” no son posibles. Las presiones que se ejercen sobre las personas refugiadas para que vuelvan a su país, entre ellas las amenazas de las autoridades kenianas, y la falta de información suficiente proporcionada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y sus asociados en la ejecución, han sumido a muchas de esas personas en una profunda sensación de angustia sobre su futuro. A la población refugiada somalí no se le ha ofrecido alternativa alguna. Si el campo de Dadaab es finalmente clausurado no tendrán adonde ir.

El informe concluye que las autoridades kenianas deben poner fin inmediatamente a las devoluciones de personas refugiadas somalíes, y que, en cambio, deben considerar, con el apoyo de los donantes, la posibilidad de adoptar soluciones alternativas a la responsabilidad de acoger refugiados. En el informe se formula también un llamamiento a la comunidad internacional para que preste un apoyo considerablemente superior a Kenia —dada su condición de país que acoge a grandes poblaciones refugiadas—, entre otras vías mediante el incremento de las plazas de reasentamiento y la provisión de financiamiento en apoyo de soluciones sostenibles a largo plazo.